



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, abril catorce (14) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001-31-05-002-2015-00583-02
Demandante: MARÍA PAULINA TORRES CANO
Demandado: UNIVERSIDAD CES
Litisconsorte: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Llamado en garantía: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
Asunto: CORRECCIÓN DE SENTENCIA

ANTECEDENTES

En providencia del 17 de marzo de 2021 se emitió sentencia de fondo al interior del proceso de referencia, donde se dispuso en su parte resolutive lo siguiente:

“CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia apelada pero por las razones aquí expuestas, la MODIFICA en el primer ítem del numeral primero en el sentido de reconocer por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$6.429.840), suma ésta que será indexada al momento de su pago

Costas en primer instancias como lo dispuso la A quo, En esta instancia se fijan como agencias en derecho de la alzada en 3 SMMLV a cargo de cada recurrente”.

Notificada la decisión, la apoderada de la parte demandante presentó solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia, en el sentido de precisar, tal y como lo indicó el

juez de primer grado, que la sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T. se entiende causada a partir del 1 de enero de 2015, pues en las consideraciones dadas en la providencia dictada por esta sala se mencionó que esta sanción comenzaba a correr a partir del 1 de enero de 2017.

CONSIDERACIONES

Para resolver el presente asunto, resulta pertinente remitirse a lo dispuesto en los artículos 285 y 286 del C.G.P que permite aclarar y corregir la sentencia cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella y cuando se haya incurrido en error puramente aritmético.

Pues bien, de los argumentos expuestos por la memorialista, encuentra la corporación que sí le asiste razón, en la medida que frente a la sanción del artículo 65 del CST la Sala no hizo modificación alguna y, verificada la condena impuesta en primera instancia al respecto, se evidencia que la misma fue por *“la suma de \$89.303,33 diarios por los primeros 24 meses, es decir hasta el primero de enero de 2017”* (fl. 323 y 324), lo que implica entonces que la condena sobre este asunto es a partir del 1 de enero de 2015, pero por un error mecanográfico se estableció en la sentencia de segunda instancia que dicha sanción sería *“por la suma de \$89.303,33 diarios por los primeros 24 meses, contados **a partir del 1 de enero de 2017** y a partir del primer día del mes 25, se cancelarán intereses de mora a la tasa máxima de crédito de libre inversión certificados por la Superintendencia Bancaria hasta tanto se realice el pago de la obligación”*, siendo entonces necesario corregir la parte motiva de la providencia dictada por esta Sala, para que en su lugar y para todos los efectos de este proceso, se entienda que la sanción moratoria del artículo 65 del CST ha de contarse a partir del primero (1) de enero de dos mil quince (2015) y no a partir del 1 de enero de 2017.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

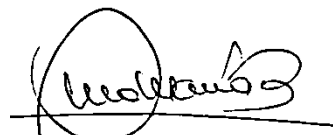
Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 62 publicados por medios digitales el 15 de ABRIL de 2021